

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500420160131302
Proceso:	Ordinario
Demandante:	JOHN JAIME CATAÑO CATAÑO
Demandado:	COLPENSIONES, AFP PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	16/12/202
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA, ADICIONA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/01/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	JOHN JAIME CATAÑO CATAÑO
DEMANDADAS	PORVENIR S.A., PROTECCION S.A. y COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-004-2016-01313-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Apelación y consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JHON JAIME CATAÑO CATAÑO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A.

En atención a la sustitución de poder aportada vía electrónica el 09 de noviembre de 2022<sup>1</sup> suscrito por Eliana Moreno Pedroza en calidad de representante legal suplente de la firma Muñoz y Escruceria S.A.S. identificada con NIT.900.437.941-7, se le reconoce personería en calidad de apoderada sustituta, al abogado Juan Camilo Polania Montoya, identificado con la CC 1.017.216.687 y portadora de la TP 302.573 del C. S de la J.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>2</sup>

John Jaime Cataño Cataño formula demanda inicialmente contra Colpensiones y Protección S.A, pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección S.A. y, como consecuencia de lo anterior **ii)** se ordene a Protección S.A. autorizar su devolución al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y devolver los aportes cotizados a dicho fondo con el correspondiente rendimiento financiero y ponerlos a su disposición para que sea esa administradora quien realice el proceso de validación de las cotizaciones **iii)** se ordene a Colpensiones a aceptar la devolución y recibirlo nuevamente como su afiliado a fin de resolver su derecho pensional. **iv)** se condene a Protección S.A. a pagar la indemnización de perjuicios ocasionados por el ineficaz traslado del RPM al RAIS **v)** se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago

<sup>1</sup> 02SegundaInstancia, 14legatosSustitucionColpensiones, pág. 09

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia, 01ExpedienteDigital. Pág. 11-21

de la pensión de vejez **vi)** lo ultra y extra petita **vii)** Se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas. Subsidiariamente solicitó la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y consecuencial a esta las mismas pretensiones contempladas para la ineficacia.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 05 de febrero de 1957, ha prestado sus servicios a entidades privadas y públicas desde el 03 de agosto de 1981 por más de 30 años con un total de 1500 semanas, encontrándose actualmente cotizando como trabajador dependiente al servicio de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suarez. Para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, laboraba para la Cooperativa de Impresores D y contaba con 37 años.

Indica que se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el I.S.S. hoy por Colpensiones desde el 03 de agosto de 1981, sin embargo con la entrada en funcionamiento de los fondos privados, se generó una dinámica de libre competencia y agresivas campañas para captar afiliados, en ocasión de las cuales fue contactado por una asesora comercial de Colmena hoy Protección S.A., quien le brindó una deficiente, incompleta, engañosa, superficial y vacilante explicación de su situación pensional, sin explicarle las consecuencias del cambio de régimen, las características del RAIS, esto con la intención de hacerle creer que en el fondo privado se pensionaría mejor, más rápido y sin tener en cuenta la edad, afirmándole también que el ISS se iba a acabar, circunstancias que lo condujeron a firmar el traslado sin que mediara informar suficiente, oportuna, clara, coherente, certera, debida y completa.

Aduce que tales omisiones constituyen un engaño y dolo por parte de la entidad, induciéndolo a error y viciando su consentimiento al no ser libre, espontaneo e informado, además de no habersele brindado reasesoria al momento en que le faltaban 10 años para cumplir la edad de pensión.

Así mismo, indica que cumplió 62 años el 05 de febrero de 2019, momento para el cual contaba con más de 1500 semanas, cumpliendo con los requisitos para tender derecho a la pensión de vejez en el RPM, sin embargo no en el RAIS no alcanza el capital necesario para acceder a una pensión debiendo esperar el beneficio de la garantía e pensión mínima, mientras que de haber permanecido en el RPM tendría derecho a una tasa de reemplazo del 80% de su ingreso base de cotización el cual equivale a 2,39 salarios mínimos legales vigentes, razón por la cual el 08 de septiembre de 2016 elevó reclamación administrativa ante Colpensiones tendiente a la declaratoria de ineficacia y/o nulidad del traslado efectuado a Protección S.A., sus correspondientes consecuencias y el reconocimiento de la pensión de vejez con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sin que se le hubiera dado respuesta.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Colpensiones<sup>3</sup>**

El demandante suscribió el formulario de vinculación al RAIS, en ejercicio del derecho a la libre escogencia consagrado en el artículo 13 de la ley 100 de 1993, literal b), sin hacer uso

---

<sup>3</sup> 01PrimeralInstancia 01ExpedienteDigital Pág. 111/118

del derecho de retracto o contar con la posibilidad de devolverse en tanto se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad mínima de pensión.

Excepcionó: imposibilidad jurídica para acceder al traslado de régimen por expresa disposición legal, buena fe, imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones pretendidas, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

## **ii) Protección S.A.<sup>4</sup>**

El demandante ejerció su derecho de afiliarse sin que medie vicio de validez a más de que se encuentra atacando un acto jurídico que no existe como es el acto de traslado a Protección S.A., esto toda vez que el actor se trasladó a Colmena y no a Protección, trasladándose de Colmena a Porvenir (sic) y posteriormente a Santander, sin que se demanden estos traslados. Por otra parte, manifiesta que para desvirtuar la legalidad o validez de un acto jurídico, se debe acreditar la existencia de vicios, sin que ocurra en este caso. Finalmente, el demandante se trasladó entre fondos, lo que desvirtúa el engaño inicial y se reitera la voluntad de continuar afiliado al RAIS.

Excepcionó: prescripción e indebida acumulación de pretensiones y la incompetencia del Juez laboral para resolverlas.

Por auto del 25 de noviembre de 2019<sup>5</sup> se ordenó la vinculación al proceso de la AFP PORVENIR S.A., quien fue efectivamente integrado y notificado el 13 de febrero de 2020<sup>6</sup> y al contestar manifestó que entre el demandante y dicho fondo no existió ningún vínculo jurídico aduciendo que nunca solicitó o suscribió formulario de afiliación, sin encontrar archivos que demuestren pago de aportes, por lo que nunca ha tenido un vínculo con Porvenir.

Excepcionó: Falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación, prescripción, prescripción de la acción de nulidad y buena fe.

## **Sentencia de primera instancia<sup>7</sup>**

El 01 de marzo de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, y por tanto, que su afiliación al RPM lo fue sin solución de continuidad. Absolvió a Porvenir S.A. y condenó a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión, todas las sumas recibidas con ocasión a la afiliación del demandante como aportes, cotizaciones y rendimientos financieros, igualmente retornará a Colpensiones las comisiones o gastos de administración, los pagos de seguro y reaseguro y los pagos realizados al fondo de garantía mínima, estos tres últimos se remitirán de manera indexada a Colpensiones. Ordenando a Colpensiones brindar las garantías de la afiliación al demandante, recibiendo todas las sumas o los valores de la cuenta de ahorro individual ya determinados y procediendo a la actualización del histórico laboral de aportes sin solución de continuidad, ordenando el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con fecha de causación del 05 de febrero de 2019 y exigible al momento en que se acredite la novedad de retiro, indicando que Colpensiones debe calcular la mesada pensional atendiendo a los criterios de favorabilidad que deba aplicar para hallar el IBL según los parámetros de los artículos 33 y 21 de la Ley 100 de 1993, pensión que será de forma vitalicia a razón de 13 mesadas por año, con los

---

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia 01ExpedienteDigital. Pág. 134/139

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia, 01ExpedienteDigital. Pág. 232/233

<sup>6</sup> 01PrimeraInstancia, 01ExpedienteDigital. Pág. 235

<sup>7</sup> 01PrimeraInstancia; 05PrimeraParteAudienciaArt77y80CPT y 06SegundaParteAudienciaArt80CPT

incrementos anuales y autorizándose los descuentos en salud, al tiempo que declaró no probadas las excepciones y condenó en costas a Protección S.A. en favor de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$3`500.000.

El juez de primera instancia fundamentó su sentencia en el precedente judicial vigente en la materia indicando que a Protección S.A. le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información al momento del traslado del RPM al RAIS, obligación que no satisfizo ni con el interrogatorio de parte, la prueba testimonial, o la prueba documental; estando sentado en estos asuntos que la carga probatoria le corresponde al Fondos receptor, pues el deber de información es mayor cuando se trata de personas que no tienen conocimiento sobre el tema, y por tanto al demandante se le debió informar los beneficios del RAIS, pero también de aquello que dejaba en el régimen de prima media, incluyendo como recuperar la afiliación. La información debió ser amplia, oportuna, suficiente y eficiente, sin que se lograra demostrar que la información fue la adecuada.

Frente a la pretensión de reconocimiento de pensión de vejez, expresó que Colpensiones no puede negar el reconocimiento de la prestación aduciendo que no han llegado los dineros de la cuenta de ahorro individual a su satisfacción. Indicando que el demandante tiene cumplidos los requisitos del Régimen De Prima Media Con Prestación Definida ya que cumplió la edad el día 05 de febrero de 2019, contando con más de 1546 semanas y que, toda vez que sigue aportando al sistema y no se ha retirado del mismo, es procedente acceder al reconocimiento pensional, pero la mesada no puede ser calculada.

Ahora, en relación con la indemnización de perjuicios, consideró que el demandante sigue aportando al sistema, lo cual impactará positivamente en su mesada pensional y al recuperar el régimen de prima media, el perjuicio queda saneado, toda vez que solo hasta la sentencia se concluye que la afiliación fue inválida, al ser una sentencia declarativa.

### **Recurso de apelación**

- i) **Protección:** Inconforme con la sentencia de instancia, solicitó su revocatoria parcial argumentando que no es procedente ordenar la devolución de los gastos o comisiones de administración y los pagos de seguro y reaseguro, pues ya fueron causados, descuentos que se realizaron conforme a la ley y como contraprestación de una buena gestión de administración, además de considerar que con ello se constituiría un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones al recibir una comisión que no cubre la pensión de vejez del demandante y no tener derecho a ella en tanto no administró los recursos, aduciendo tiene derecho a conservar dicho concepto. Frente al seguro previsional, expresa que ya fue girado a una aseguradora para cubrir las contingencias, por lo que no podría solicitar el recobro al ser la aseguradora un tercero de buena fe, frente a los cuales también operaría la prescripción al no financiar directamente la pensión de vejez. Estima por demás que en caso de confirmar la sentencia se le estaría condenando al pago de unos perjuicios cuya causación no fue discutida ni demostrada.
- ii) **Colpensiones:** a su turno deprecó que se revoque o modifique el numeral cuarto ordenó a Colpensiones a reajustar el histórico laboral de aportes del demandante sin solución de continuidad y resolver el derecho pensional sin esperar el traslado del capital de la cuenta de ahorro individual, aduciendo que deberá recibir primero todos los aportes realizados para después proceder al reconocimiento, ello por cuanto la decisión atacada, desconoce el principio de sostenibilidad financiera, el

cual garantiza la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, pues no obstante no fue parte del acto jurídico de traslado si está en la obligación de velar por los recursos públicos.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Concedido el traslado para alegar de conclusión, únicamente fue descorrido por **Colpensiones<sup>8</sup> y Porvenir<sup>9</sup>**, mientras que la parte demandante y Protección S.A. se abstuvieron de remitir pronunciamiento alguno.

Porvenir S.A., solicita se confirme la decisión en lo que a ella respecta, en tanto el demandante nunca solicitó o suscribió formulario de afiliación a esa entidad.

Por su parte, Colpensiones solicita se revoque la sentencia de primera y se le absuelva de todas y cada una de las condenas pues su actuar fue legal.

## **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS; de ser afirmativa la respuesta, **b)** se precisarán las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones; **c)** determinar si le asiste o no derecho al demandante al reconocimiento y pago de la pensión de vejez deprecada.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Ahora, en relación con la pretensión de pago de indemnización de perjuicios, esta sala se abstendrá de pronunciarse frente a esto, en razón a que los mismos fueron negados por el a quo y la parte interesada no interpuso recurso de apelación en ese sentido.

### **Hechos relevantes probados documentalmente**

John Jaime Cataño Cataño nació el 05 de febrero de 1957<sup>10</sup>. Comenzó a realizar aportes para los riesgos de Invalidez, vejez y muerte en agosto de 1981, a través del ISS<sup>11</sup>, realizó

---

<sup>8</sup> 02SegundaInstancia, archivo 14AlegatosSustitucionColpensiones.pdf

<sup>9</sup> 02SegundaInstancia, archivo 13AlegatosPorvenir

<sup>10</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág. 61

<sup>11</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág. 63/65, según se desprende de la historia laboral.

traslado de Régimen a través de Colmena Cesantías y Pensiones hoy Protección 09 de julio de 1999<sup>12</sup>, posteriormente realizó traslado a Santander con AFP anterior Protección S.A. el 25 de julio de 2003<sup>13</sup>, trasladándose a Protección S.A. el 04 de noviembre de 2010<sup>14</sup>. Solicitó traslado a Colpensiones el 08 de septiembre de 2016<sup>15</sup>. Según historia laboral expedida por Protección S.A, el 21 de marzo de 2017, el señor Cataño tiene 1549 semanas cotizadas, de las cuales 649 corresponden al bono pensional y 900 a Protección S.A.<sup>16</sup>

#### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte del demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335<sup>17</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>18</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>19</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>20</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>21</sup>.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese

---

<sup>12</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág 96

<sup>13</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág 142

<sup>14</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág 144

<sup>15</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág. 92/93

<sup>16</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág 154/156

<sup>17</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>18</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

<sup>19</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>20</sup> **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

<sup>21</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para



pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado, pues ello no constituye razón atendible para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que estuviese precedido de la satisfacción o del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado.

No son admisibles los argumentos expresados por la pasiva, en cuanto a que, al momento del traslado, éste obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó, limitándose a afirmar que así había ocurrido. El que asevere que han hecho campañas masivas para educar al consumidor financiero y comunicados de prensa informando los cambios normativos o que el deber de información no fue obligatorio sino desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2014 y 2015, puesto que a la actividad misma de la administradora demandada subyace la obligación desde la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional.

Con independencia de que la afiliación se diera con antelación o en momento posterior a la regulación de deberes del consumidor financiero, las AFP deben, en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la referida Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba ha de indicarse que ésta se radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: **i)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **ii)** Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió el

**asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada a la afiliada y posibilitó que esta firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

**En el sub-lite**, prueba que John Jaime Cataño Cataño nació el 05 de febrero de 1957<sup>22</sup>, por lo que, al 1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para él, por ser trabajador dependiente del sector privado, contaba con 37 años y al no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que hace innecesario verificar si para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, al 29 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

Adicionalmente, fue recaudado interrogatorio al demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se afilió a Colmena producto de una reunión en el auditorio del Hospital Marco Fidel Suarez lugar para el cual laboraba y que duró 10 minutos, el asesor le indicó que el ISS se iba a acabar, que cuando se pensionaran le iban a dar más plata que el ISS y que, en caso de fallecer, en el ISS se perdía la plata y en Colmena la heredaba la familia. Indicó que la motivación para trasladarse fue el temor a quedarse sin pensión, nunca le hablaron sobre la edad o monto de la pensión, ni que pasaría con las semanas cotizadas al ISS, ni que podía devolverse a Colpensiones, tampoco se le indicaron las diferencias entre el ISS y Colmena.

Protección S.A. no aportó documental donde se plasme la asesoría que dice haber brindado al señor Cataño Cataño, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa al entonces potencial afiliado, pero se abstuvo de presentar prueba documental en ese sentido.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar al hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario, ni siquiera el formulario de afiliación, la demandada solo indica que la misma se hizo de manera libre y voluntaria; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento

---

<sup>22</sup> 01PrimeraInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág. 61

de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar**, pues la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**<sup>23</sup>, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993<sup>24</sup> genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como

---

<sup>23</sup> por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

<sup>24</sup> **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier

repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271<sup>25</sup> de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliado sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación y consulta.

## **b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia**

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **Protección S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que el hoy demandante figuró como afiliado al RAIS.

**Adicionalmente**, se precisa que **Protección S.A. también debe trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de**

---

persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

<sup>25</sup> El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud<sup>1</sup> en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

**Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras**, por ella descontadas durante el periodo de afiliación del hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni si el dinero del afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previo a la afiliación, la situación particular del demandante, e ignorarse verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor del actor, como anteriormente se explicó.

**Protección S.A.**, también deberá responder por la devolución de lo descontado por cuotas o gastos de administración, aportes para la garantía de pensión mínima y primas de seguros; durante el tiempo de afiliación del demandante ante COLMENA cesantías y pensiones e ING Santander Pensiones y Cesantías, dado que, en virtud de la fusión presentada por esas AFP con Protección S.A., al celebrar el referido negocio jurídico, se subroga tanto en derecho, como en obligaciones respecto de sus afiliados.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral<sup>26</sup> contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en ella, **se deben trasladar debidamente indexadas y con cargo a**

---

<sup>26</sup> Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil<sup>26</sup>, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

**sus propios recursos**, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCION S.A. sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PROTECCION S.A. los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por el actor durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará y adicionará** la sentencia conocida en apelación y consulta.

**Resuelto el primer problema jurídico, se aborda ahora el derecho pensional pretendido.**

Para determinar si el hoy demandante consolidó o no el derecho pensional deprecado, se consideran los siguientes elementos fácticos y jurídicos: el actor nació el 05 de febrero de 1957<sup>27</sup>. Según historia laboral, al 21 de marzo de 2017 el señor Cataño Cataño tiene 1549 semanas cotizadas, de las cuales 649 corresponden al bono pensional y 900 a Protección S.A.<sup>28</sup>, laboró al servicio de entidades del sector privado y público, y al no ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su prestación de vejez debe ser analizada con fundamento en la Ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003, como acertadamente dispuso la A quo.

Respecto a la causación y disfrute de la prestación, cabe precisar que el actor cumplió los 62 años de edad el 05 de febrero de 2019 y al 21 de marzo de 2017 ya contaba con 1.549 semanas de cotización<sup>29</sup> en toda su vida laboral, por lo que el actor causó su derecho a la pensión de vejez el 05 de febrero de 2019 –fecha en la que reunió los requisitos de edad y semanas- pues arribó a la edad de 62 años y contaba con una densidad de semanas superior a las 1.300 exigida para causar el derecho. Sin embargo, con la documental aportada no es posible concluir que hubiera realizado su retiro efectivo del sistema, máxime cuando el actor en el interrogatorio de parte recaudado en primera instancia, aceptó estar activo laboralmente, razón por la cual no es dable conceder el disfrute de dicha prestación, hasta tanto el demandante no acredite su retiro del sistema en tanto la liquidación de la prestación debe hacerse teniendo en cuenta hasta la última semana de cotización realizada por el demandante. Por lo expuesto, la Sala encuentra acertada la posición del A quo, debiéndose confirmar la sentencia en este aspecto.

Finalmente, **ha de revocarse parcialmente el numeral 4** de la parte resolutive de la sentencia, en cuanto el A Quo dispuso que Colpensiones no podrá negar el reconocimiento pensional por no haber recibido los valores de la cuenta de ahorro individual, toda vez que

<sup>27</sup> 01PrimerInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pág. 61

<sup>28</sup> 01PrimerInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pag 154-156

<sup>29</sup> 01PrimerInstancia, archivo 01ExpedienteDigital Pag 154-156

ello no fue objeto de pretensiones de la demanda, lo cual impide la contradicción de la pasiva en torno a ello.

### III. EXCEPCIONES

Se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Protección por haber resultado vencida en su recurso. Se fija agencias en derecho en el equivalente a 1SMLMV en 2022 y en favor del demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el 01 de marzo de 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por JOHN JAIME CATAÑO CATAÑO contra COLPENSIONES, PORVENIR S.A. Y PROTECCION S.A., **modificándola y adicionándola**, en el sentido en que ésta última AFP:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que el demandante ha figurado como afiliada al RAIS

PROTECCIÓN S.A trasladará a Colpensiones los valores descontados al actor, por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, el valor de primas de seguros, más comisiones de administración de manera **indexadas**, tal como fue ordenado por el A

quo, pero con cargo a sus propios recursos, así como lo descontado por dichos conceptos durante todo el tiempo en que dicho demandante figuró como afiliado a COLMENA cesantías y pensiones e ING Santander Pensiones y Cesantías.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A los valores correspondientes a los conceptos aludidos e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del demandante.

**SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral CUARTO de la referida providencia, en cuanto declaró que “una vez Colpensiones realice el reconocimiento de la pensión del demandante, no podrá negarla aduciendo que no ha recibido los aportes por parte de Protección S.A.”, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, ordenándose a Colpensiones verificar el cumplimiento de las ordenes de manera coordinada con Protección S.A.

**TERCERO: MODIFICAR** el numeral QUINTO de la sentencia, en el sentido de indicar que Colpensiones al momento de reconocer la prestación cuantificará el IBL teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 21 y 34 -modificado por el art.10 de la Ley 797 de 2003 de la Ley 100 de 1993.

**CUARTO:** Costas en esta sede a cargo de PROTECCION S.A. Agencias en derecho en el equivalente a 1SMLMV en 2022.

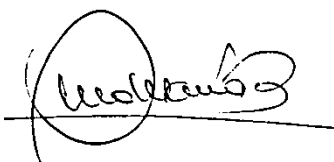
Se ordena notificar lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN  
(En ausencia justificada)